

25.ª SESION ORDINARIA — AGOSTO 6 DE 1885

Presidencia del señor **MADERO**

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Alvear, Baibiene, Barros, Cambaceres, Carrillo, Dávila, Febre, Gelabert, Juárez Celman, Igarzábal, Mendoza, Navarro, Nougués, Oliva, Ortiz, Rodríguez, Rojas y Santillán.

Senadores ausentes, con licencia: Avellaneda, Civit, del Valle y Gil.

Senadores ausentes, con aviso: Baltoré, Cello, Cortés, Moyano, Pizarro, Rocha y Zapata.

Senador ausente, de la Capital: Bárcena.

SUMARIO

1.—Asuntos entrados.

2.—Autorización a don Santiago Calzadilla para hacer la apertura de un canal en Carabelas. Se aprueba el proyecto con la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados.

3.—Organización de los tribunales de justicia de la Capital. Se aprueba el despacho de la Comisión de Legislación hasta el artículo 17 inclusive.

—En Buenos Aires, a seis de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Avellaneda, Civit, del Valle y Gil, con licencia; Bárcena, ausente de la Capital; Baltoré, Cello, Cortés, Moyano, Pizarro, Rocha y Zapata, con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 5 del corriente (extraordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, a saber:

1

Poder Ejecutivo

Nota del 5 del corriente, acusando recibo de la del Senado en que se pedía ordenara al procurador fiscal, acuse al diario «El Debate» por un artículo calumnioso que la Cámara consideró un desacato a su autoridad y comunicando haber pasado a dicho funcionario los antecedentes del caso para que entable la acusación correspondiente. Al archivo.

Solicitud particular

Daniel Almada, solicita subvención para continuar sus estudios de música en Europa. Comisión de Peticiones.

2

Sr. Presidente. — Se va a pasar a la orden del día.

Está en discusión la modificación introducida por la Cámara de Diputados en el proyecto autorizando la apertura del canal Carabelas.

Sr. Rojas. — Yo creo, señor presidente, que el motivo de la discusión anterior ha desaparecido ya.

Debo hacer presente al Senado que según los datos obtenidos por la Secretaría e informes que he recibido del mismo empresario, él ha-

bía renunciado ante la Comisión de la Cámara de Diputados a la suma de diez mil pesos que se le acordaba, y como este era el único punto en discusión, sobre el que debía o no insistir el Senado, creo que debemos votar el asunto con este antecedente: que el empresario acepta la supresión de esa partida y se conforma con el proyecto tal cual ha venido sancionado por la Honorable Cámara de Diputados.

Mi distinguido colega por Corrientes, que discutía sobre este punto, parece que está ya también informado a este respecto, pues partía de una base equivocada por no haber tenido ocasión, tal vez, de hablar con el empresario.

Sr. Baibiene. — Así es efectivamente, señor presidente. Yo hice oposición a la modificación introducida por la Honorable Cámara de Diputados en este proyecto de ley, en virtud de las razones que había tenido ocasión de oír en el seno de la Comisión del Interior cuando ella estudiaba este asunto.

No había tenido ocasión, después, de hablar con el empresario, y entendía que le era necesaria la subvención que primitivamente había solicitado del Congreso y que el Senado le acordó.

Pero después de la última discusión habida, estuvo el mismo señor Calzadilla en mi casa a decirme que, instado por la Comisión de Obras Públicas de la Honorable Cámara de Diputados, había tenido que renunciar a la subvención en cuestión.

Por consiguiente, no hay cuestión ya sobre este punto; yo desisto de la oposición que hice y espero solamente que el Senado acepte la modificación introducida por la Cámara de Diputados, a fin de que este proyecto quede convertido en ley.

Sr. Presidente. — Se va a leer la modificación.

Sr. Secretario. — La modificación consiste en la supresión del artículo que acuerda a don Domingo Calzadilla la suma de 10.000 pesos para terminar la apertura del canal.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se votará si se aprueba la supresión hecha por la Cámara de Diputados.

—Se vota y resulta afirmativa, quedando el proyecto definitivamente sancionado en la siguiente forma:

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Concédese a don Santiago Calzadilla el permiso que solicita para abrir el

canal de Carabelas de conformidad a los planos presentados al Poder Ejecutivo y bajo la inspección del Departamento de Ingenieros.

Art. 2º — Acuérdasele el derecho de cobrar a los buques que transiten por el referido canal, cinco centavos por tonelada de registro, por el término de veinticinco años, a contar desde el día en que se termine la obra.

Los buques de la armada nacional no pagarán este impuesto.

Art. 3º — El canal tendrá, cuando menos, veinte metros de ancho y dieciséis pies de profundidad y deberá estar terminado dos años después de sancionada esta ley.

Art. 4º — Comuníquese, etc.

3

Sr. Presidente. — Se va a pasar a considerar la orden del día.

—Se lee:

Honorable Senado:

Vuestra Comisión de Legislación ha tomado en consideración los proyectos de ley del Poder Ejecutivo de Junio 27 de 1882, Julio 26 y 31 de 1884; el del señor senador Cambaceres sobre organización de la justicia de paz de la Capital y el del señor senador Gelabert, estableciendo los recursos de inaplicabilidad e inconstitucionalidad contra las resoluciones de las cámaras de apelaciones de la Capital para ante la Suprema Corte de Justicia nacional; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la sanción del adjunto en substitución de aquéllos.

Sala de comisiones del Senado, Buenos Aires, Julio 7 de 1885.

Miguel S. Ortiz. — Rafael Cortés. — Ramón Febre.

Sr. Presidente. — Está en discusión en general.

Sr. Febre. — El miembro informante de la Comisión no se encuentra presente en estos momentos. Tal vez algún inconveniente de última hora le ha impedido concurrir a esta sesión; pero, por esta razón, la Comisión no va a dejar de manifestar a la Honorable Cámara, en concreto, las razones que han militado en su ánimo para aconsejar la aprobación del proyecto que está sometido a la consideración del Senado.

Como lo dice el mismo despacho de la Comisión, este proyecto tuvo su origen en otro que pasó el Poder Ejecutivo al Honorable Senado en el año 1882, y si mi memoria no me es infiel en este momento, me parece que en el año 1883 la Comisión de Legislación presentó al Senado su despacho sobre este proyecto aconsejando las reformas que a su juicio debían hacerse a la ley orgánica en vigencia de los tribunales de la Capital de la República. El Senado resolvió entonces que volviera a la Comisión de Legislación. Así es que la Comisión encontró el año pasado este asunto pendiente en su cartera. Yo formaba parte entonces, como hoy, de la Comisión de Legislación y recuerdo que fué despachado y puesto a la consideración del Senado; pero vino el señor ministro de justicia, culto e instrucción pública y pidió a nombre del Poder Ejecutivo que volviera a Comisión, como se había hecho en el año anterior.

Como mis honorables colegas deben recordarlo, la Comisión se opuso y resolvió entonces por esta Honorable Cámara que quedara para considerarse en las primeras sesiones de este año.

Este es, pues, el proyecto que se somete ahora a la consideración del Honorable Senado.

El Poder Ejecutivo ha mandado algunos otros antecedentes por intermedio del señor ministro del ramo, para que la Comisión los tuviera en consideración. Ha tomado algo de estas indicaciones y ha reformado, en lo que ha creído a su juicio reformable, el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo; de manera que la reforma principal que se hace a la ley orgánica de los tribunales de la Capital, es en primer término, el establecimiento de la justicia de paz, servida por letrados.

Se cree, según la Comisión —, y ella ha consultado abogados muy notables de este foro y ha oído también los informes del señor ministro del ramo sobre el particular —, que con esta reforma ha de subsanarse en gran parte el inconveniente que hay para la fácil expedición de los asuntos judiciales en esta Capital.

Hay un cúmulo de asuntos retardados en las cámaras de apelaciones desde antes que la Capital de la República se fijara definitivamente en esta ciudad; y no tienen posibilidad de despacharlos todos y ponerse al día, porque vienen otros asuntos nuevos en apelación a que también hay que atender.

Con el establecimiento de la justicia de paz, servida por letrados, se cree que se disminuirán probablemente en la mitad los asuntos que van en apelación a la Cámara, porque, exten-

diéndose como se extiende, la jurisdicción de los jueces de paz al doble de la cantidad, quedan terminados con la apelación que se hace a los juzgados de primera instancia.

Esta es la reforma principal que tiene el proyecto de ley sobre este particular.

Hay otra reforma también de gran transcendencia y es el establecimiento de jueces de instrucción para la justicia en lo criminal.

Es una necesidad bien sentida y reclamada por todos, hacer desaparecer el gran inconveniente, que mortifica notablemente los sentimientos humanitarios de un país culto como el nuestro, de que muchos de los que se encuentran desgraciadamente sometidos a la justicia criminal permanecen encarcelados un período de años, mientras se hace el sumario y llega la causa en estado de que el juez se pronuncie, ya sea absolviendo muchas veces, y otras condenando al reo.

Con los jueces de instrucción, se evitará este mal grave: que un hombre que no sea realmente culpable esté muchos años preso porque la justicia será breve.

El Poder Ejecutivo había propuesto también el aumento de miembros de la Cámara, pero esta exigencia ha sido abandonada por el mismo ministro del ramo, creyendo que, con las reformas indicadas, es innecesario el aumento del personal de jueces.

Tampoco ha aceptado la Comisión el aumento de fiscales, porque según informes del que sirve actualmente la fiscalía y que, sea dicho en su honor, la sirve con mucha contracción, puntualidad e inteligencia, se encuentra al día en el despacho de los asuntos; así es que no hay necesidad de aumento de personal en la fiscalía de la justicia en lo criminal.

Estas son las reformas capitales de esta ley: hay otras parciales como lo pueden notar los señores senadores, haciendo su comparación con el proyecto que se somete a la consideración del Honorable Senado.

La Comisión se honrará en dar algunas explicaciones sobre cualquiera de los puntos que abarea este despacho, cuando se discuta en particular.

—Se vota en general el despacho y es aprobado.

—En particular se aprueban los siguientes artículos:

Artículo único. — Modifícase la ley de 6 de Diciembre de 1881, en la forma que a continuación se expresa:

TITULO PRELIMINAR

Artículo 1º — La administración de justicia de la capital de la República será desempeñada por las autoridades siguientes: jueces de paz, jueces de mercado, jueces de primera instancia, cámara de apelación y demás funcionarios que en esta ley se determinan.

TITULO I

CAPÍTULO I

De los jueces de paz

Art. 2º — La justicia de paz será administrada por jueces de paz nombrados con arreglo a las disposiciones de esta ley.

Art. 3º — El municipio de la Capital se dividirá en secciones numeradas por orden sucesivo. Cada sección tendrá un juez de paz y demás empleados que la ley determine.

Art. 4º — Para ser juez de paz se requiere ser ciudadano argentino, tener 25 años de edad y ser abogado con título universitario.

Sr. Ortiz. — Pido la palabra.

Aunque soy miembro de la Comisión de Legislación y he tenido ocasión de estudiar este proyecto, después de impreso, he notado, a mi juicio, una deficiencia. Creo que debería agregarse como artículo el siguiente:

«El juzgamiento de las faltas o contravenciones a las ordenanzas municipales o policiales, corresponde exclusivamente a cada una de estas administraciones, cuando la pena no exceda de un mes de arresto o cien pesos de multa.»

La razón que tengo para proponer esta agregación es que es necesario establecer quiénes van a conocer de estas cuestiones.

Se les quita a los jueces de paz la jurisdicción sobre las causas correccionales, y, desde que se han suprimido los alcaldes, hay que fijar las autoridades que van a entender en los asuntos de multas y de los arrestos que no pasen de un mes, porque de los que excedan han de conocer los jueces correccionales, como se establece en el capítulo correspondiente.

Como inciso del artículo 5º no puede colocarse, así es que debe ponerse después del 5º como artículo 6º y alterar la numeración siguiente.

Estando conforme mi colega de Comisión con este artículo, lo propongo como una modificación que ella introduce.

Sr. Presidente. — No haciéndose observación, queda sancionado el artículo propuesto por el señor senador como artículo 6º. La numeración de los siguientes, se alterará por Secretaría.

Sr. Juárez Celman. — Deseo saber la razón por qué se establece en el inciso 1º del artículo 5º, que los juicios sucesorios o de concurso de acreedores, aunque no excedan de mil pesos, corresponderán a los jueces de 1ª instancia.

Sr. Febre. — Porque, el señor senador sabe, que los juicios sucesorios siguen una tramitación escrita, para que quede constancia de todos los actos, por las dificultades que pueden surgir entre los mismos interesados, como sucedería ante los jueces de paz, en que los juicios son verbales.

Sr. Juárez Celman. — Pero levantan actas.

Sr. Febre. — El señor senador sabe, porque es abogado, que, en los juicios sucesorios, tiene que intervenir muchas veces el fiscal o el defensor de menores, y ninguno de estos funcionarios actúan ante los jueces de paz.

Sr. Juárez Celman. — Pero sería conveniente que actuaran, porque los pleitos de sucesión son los más dispendiosos.

Sr. Febre. — Precisamente lo que la Comisión desea es que se disminuyan los gastos.

Sr. Ortiz. — Como se trata de juicios universales, hacerlos actuar ante la justicia de paz, sería darle a esta una importancia que en realidad no tiene.

La Comisión se propone también evitar tramitaciones.

Sr. Febre. — Si estos asuntos se dan a los jueces de paz, habrá mayores dificultades y no se conseguirá el objeto que deseamos todos, que es brevedad y economía en los gastos, porque generalmente vendrían las apelaciones.

Sr. Juárez Celman. — Yo no estoy conforme con ese inciso y he de votar en contra de él.

Sr. Baibiene. — Pido la palabra.

Estoy enteramente de acuerdo con la oposición hecha por el señor senador por Córdoba, al inciso en la forma en que está y en la parte a que se ha referido.

Todos sabemos que las pequeñas herencias de mil, de quinientos y de doscientos pesos, que dejan generalmente a sus sucesores, trabajadores, que las han acumulado gota por gota de su sudor, desaparecen por completo en medio de ese fárrago de papeles que se amontonan en los expedientes sucesorios, tramitados por ante la justicia de primera instancia.

El codificador argentino ha establecido en su monumental obra, muchas disposiciones que

tienen la tendencia de evitar estos largos juicios por escrito, y así ha prescripto en muchas ocasiones la reunión, por ante el juez de la causa, de herederos o interesados; y ante el juez de paz, que escritura en su libro de actas todo cuanto él pasa, se puede substanciar perfectamente la causa, con esas reuniones de acreedores con presencia del defensor o tutor especial de menores establecido por la ley, y del fiscal mismo si alguna intervención hubiera de dársele dejando constancia escrita y fehaciente de todo el juicio seguido, sin dispendio, sin gastos mayores para los interesados; y de esa manera puede suceder, y necesariamente ha de suceder, que los herederos de una pequeña suma como la de que se trata, y aún de menos, la reciban y no hayan de quedarse completamente en la calle, después de haber perdido el amparo de su padre trabajador, porque todo se insume en esas planillas de escribanos, gastos de abogados, etcétera, cosa que a todos consta, señor presidente, porque en una ciudad populosa como ésta se presenta cincuenta casos de esta naturaleza por día.

Es la excepción, es rarísimo el caso de una pequeña herencia de cinco mil, y aún de dos mil pesos, de la cual hayan de recibir una mínima parte los herederos; siempre se evapora, señor presidente, siempre, porque la tramitación por escrito es sumamente larga, es demasiado profusa, llena de formalidades, y los gastos son por consiguiente exorbitantes relativamente al interés de que se trata.

El papel sellado mismo que se emplea para estos asuntos es demasiado caro para que puedan soportarlo éstos de menor cuantía.

Estoy pues en un todo de acuerdo con el propósito manifestado por el señor senador por Córdoba.

Sr. Juárez Celman. — Hay otra razón más, y es que las sentencias de estos jueces de paz son apelables en caso que pasen de cien pesos para ante la justicia de 1ª instancia.

De manera que los interesados siempre tendrán esta garantía, de poder apelar al juez superior.

Sr. Febre. — Pienso que los inconvenientes que hace notar el señor senador por Corrientes, respecto al inciso 1º del artículo 6º, que ya se había sancionado, y se trae nuevamente a discusión, a lo que por otra parte, no me opongo, no son efecto de las causas que él ha apuntado.

Los dispendios en los juicios sucesorios no son originadas por la tramitación escrita, no es exacto, me parece que mi colega por Co-

rrientes padece en esto un error. La tramitación por escrito, no es dispendiosa si no se quiere que lo sea. Lo que generalmente trae gastos, y suele agotar muchas veces testamentarias, no pequeñas sino enantiosas, son los pleitos que se producen entre los mismos interesados en la herencia, ya porque alguno pretenda derechos que no están perfectamente establecidos, ya porque desgraciadamente tenga pendiente algún pleito la testamentaria, pleito que se siga sosteniendo y en el que se insume la mayor parte del caudal hereditario. Pero el que sean escritos los juicios, no es lo que importa gravamen a las testamentarias. Si se ha hecho esta excepción estableciéndose que los juicios sucesorios vayan siempre a la justicia ordinaria, es porque ha querido garantizarse por este medio las herencias en que generalmente hay menores, pues cuando todos los interesados son mayores de edad, pueden partirse privadamente la herencia, y dar de ello conocimiento al juez someténdolo a la aprobación judicial, de cuya manera no tiene gasto de ninguna clase. Cuando hay menores es necesaria la intervención del defensor de menores, y siempre la del agente fiscal.

Estas son las razones que han tenido los autores del proyecto para aconsejar esta excepción en favor, y tratándose de garantizar y proteger los intereses de los menores en los juicios sucesorios; porque, como he dicho, cuando hay mayores se puede hacer privadamente la división de la herencia.

Sr. Juárez Celman. — Es bueno tener en cuenta que estos jueces son letrados.

Sr. Febre. — Pero son letrados con una práctica pequeña y limitada y los jueces de 1ª instancia lo son con una práctica de alguna consideración, a estar a los requisitos, que se exigen por la ley para el nombramiento de estos funcionarios.

Sr. Baibiene. — Es una fatalidad, señor presidente, que pesa indudablemente sobre nuestra raza esta de que siempre la forma haya de comerse el fondo, como ha dicho un profundo pensador francés, en nuestros juicios y en todos nuestros asuntos.

Hay otros pueblos, y muchos que adolecen del mismo defecto, probablemente orgánico.

La «papelería», dicen los franceses, obstruye todo y lo absorbe todo. La experiencia en estos juicios demuestra a todo el mundo que la intervención del defensor de menores y la intervención del tutor, que hay además de la intervención del defensor de menores, establecida por el código, son en las noventa y nueve cen-

tésimas partes de los casos, nocivos a los intereses de los menores, antes que benéficas.

El señor miembro informante de la Comisión, como todos los abogados que están aquí presentes, saben que un juicio tramitado por escrito es enormemente dispendioso; está, como lo he recordado al principio, primero el papel sellado, que es caro tratándose de cantidades tan insignificantes como éstas, está en seguida, el trabajo del abogado, que aunque sea simplemente un escrito de cajón, como dicen, vale siempre mucho, con relación a la cantidad de que se trata.

Los juicios por escritos son además mucho más ocasionados a las controversias, a las contradicciones, a los incidentes y a las articulaciones, porque es de eso de lo que viven los abogados; de promover incidentes, de hacer articulaciones.

¿Qué mucho sería, señor presidente, que el juez de paz, que tramita un asunto de estos, comunicara al defensor de menores que por ante su juzgado se tramita ese asunto, para que nombre tutor especial a fulano o Zutano que son herederos en esta forma o en esta otra. Llenaría la formalidad el departamento de menores; concurriría, si acaso a los juicios verbales que tuvieran lugar en las diferentes estaciones de la causa; o no concurriría, y el juicio se substanciaria y la herencia iría a manos de los herederos, de los pobres herederos que no cuentan con otra cosa para vivir y que, como lo he recordado y vuelvo a repetirlo, porque es de mucha importancia, que no cuentan sino con eso, cuando precisamente les falta el padre y la madre, que les alimentaba con el sudor de su frente.

Yo creo, señor presidente, que la Comisión no debe hacer oposición a la modificación propuesta por el señor senador por Córdoba, que esa modificación debe votarse.

Sr. Igarzábal. — Pido la palabra.

Todo lo que sea, señor presidente, ahorrar trámites y gastos en el juicio testamentario y en los concursos, es muy loable, y en este sentido hace mucha fuerza en mi ánimo las razones que han aducido los señores senadores por Córdoba y Corrientes; no me encuentro pues distante de prestarle mi voto o de asentir a la supresión que ellos proponen en este inciso 1º del artículo 5º si se me salvara una duda, que se desprende de las atribuciones dadas a los jueces de paz de conocer de las testamentarías y concursos, cuyo importe no exceda de mil pesos.

Desde luego, si se estableciera esto, resultaría que por ley, estaría establecida la jurisdic-

ción hasta llegar a mil pesos, en los jueces de paz, más arriba de mil pesos en los jueces letrados, y habría, por supuesto, una doble ejecución para estos juicios, y como la base para determinar la jurisdicción de los jueces de paz y de los letrados es el cuántum, y como no se sabe el cuántum hasta que no se haya hecho la tasación y no se han reunido los acreedores, ¿cómo se sabrá, pues, si corresponde el caso a los jueces de paz o a los jueces letrados?

Si se salvara esta dificultad, yo accedería con mucho gusto a la supresión que indican se haga los señores senadores por Córdoba y Corrientes pero no veo facilidad para ello y he aquí donde estriba mi duda.

Sr. Juárez Celman. — En el momento que se presentaran acreedores, si cobraban una suma mayor de mil pesos, es claro que el juez de paz tendría que rechazar el juicio.

Ahora si se iniciara el juicio de sucesión ante el juez de paz, el que inicia el juicio, al presentarse, hará declaración escrita o bajo juramento de la cantidad de bienes y su valor aproximativo.

Si en el curso del juicio se descubriera que había más bienes o que importaban una suma mayor, se rechazaría, porque hay un artículo de esta misma ley que dice que cuando se presenten estas demandas por una cosa que no sea una cantidad determinada de dinero, sino objeto que lo valgan, debe jurar el que presenta la demanda sobre el valor de dichos objetos.

Entonces está previsto el caso. Quiere decir que, para iniciar un juicio de sucesión debe empezar el que lo inicia, jurando que el valor del objeto no excede de mil pesos. Si en el curso del juicio resultara ser mayor dicho valor el juez de paz desechará el juicio.

Si la demanda en los otros juicios no es por dinero, ¿cómo hace el juez para saber su valor? Por la declaración del demandante. Si en el curso del juicio resulta que el objeto vale más, el juez desecha el juicio.

Pero me parece que la dificultad a que hace referencia el señor senador, se produce en todo juicio.

Sr. Igarzábal. — No en todos los juicios se designa la jurisdicción por la cantidad; los hay que se designan por la naturaleza.

Sr. Juárez Celman. — Por la cantidad de dinero.

Sr. Igarzábal. — En ese caso sí.

Sr. Juárez Celman. — Y en todos los asuntos en que el valor cuestionado no exceda de mil pesos.

Sr. Igarzábal. — Eso es lo que establece la primera parte del inciso 1º.

Sr. Juárez Celman. — Respecto a la primera parte que dice: «De los asuntos civiles o comerciales en que el valor cuestionado no exceda de mil pesos», no me opongo. Pido únicamente la supresión de la segunda parte que dice: «pero no en juicios sucesorios o de concursos de acreedores, cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a los jueces de primera instancia.»

Sr. Igarzábal. — Si se aclaran las dificultades que pudieran surgir, me es muy simpática la proposición.

Sr. Baibiene. — Pido la palabra.

Voy a permitirme agregar algunas reflexiones a las que ha hecho el señor senador por Córdoba.

Estas dudas del señor senador por San Juan, las resuelve el mismo interés de las partes que inician el juicio.

A nadie le conviene ocurrir ante el juez que, por razón de jurisdicción, de cantidad u otras, no es competente en un asunto dado, porque el trabajo hecho, y también el dispendio realizado quedarían completamente infructuosos, y muchas veces se vería al litigante expuesto a pagar costas, tratándose de un asunto contencioso, por haber sido demandado ante un juez incompetente.

En estos juicios sucesorios, queda la viuda, quedan los herederos, que saben perfectamente sobre todo, tratándose de herencias pequeñas, a qué atenerse respecto de su monto, y se guardarán muy bien, por su propio interés, de ir a iniciar el juicio ante el juez de paz, si el monto de la herencia fuese mayor del límite que determina la ley para su jurisdicción, y ocurrirán seguramente ante el juez de primera instancia.

A mi juicio, no hay peligro ninguno. Si existe, es para los interesados, y éstos, seguramente, con todo cuidado han de tratar de esquivarlo.

Considere esto el señor senador, y verá que no hay ninguna dificultad.

Sr. Juárez Celman. — Pido que se vote por partes el inciso, para votar en contra de la segunda.

—Se vota la primera parte del inciso 1º del artículo 5º, y es aprobada, rechazándose la segunda.

—El inciso 2º se aprueba en esta forma:

2º De las demandas por desalojo, cualquiera sea la importancia del alquiler,

cuando no medie contrato escrito, o si habiéndolo, el valor litigado no excediese de mil pesos.

Sr. Carrillo. — Pido la palabra.

Antes de pasar al artículo 6º, voy a hacer una indicación a la Comisión, por si merece ser considerada por ella.

Ya que el Senado ha sancionado la supresión de la justicia de paz, de esa justicia de carácter esencialmente conciliatorio y amigable que quiso crearse cuando se suprimieron los cabildos, para sustituirla por tribunales de derecho, por jueces abogados que apliquen la ley en todo su rigor, me parece que se podría aprovechar de los conocimientos profesionales de los jueces, para encargarles de otras funciones, para las cuales este proyecto crea empleos, recargando considerablemente el gasto del sostenimiento de la administración de justicia.

Me refiero a la organización de los sumarios para la comprobación de los delitos cuyo juzgamiento corresponde al juez del crimen.

Encargando esta atribución a los jueces letrados, que no llamaré de paz, sino de distrito, seguramente se consigue no aumentar el personal de la administración de justicia innecesariamente, y abreviar el tiempo que transcurre entre la ejecución de los delitos que pudieran cometerse en el municipio y su castigo.

Indudablemente, los delitos que se cometan en cualquiera de los diez distritos en que está dividida la Capital, serán más fácilmente averiguados, más seguramente comprobados en el mismo barrio o distrito por el juez local, que por uno o dos jueces centrales, con las mismas funciones.

No propondría esto a no ser el antecedente que tengo de que desde ahora se constituyen jueces letrados para la administración de justicia en cada uno de los distritos en que se divide la Capital.

No sé si la Comisión ha tenido en cuenta esto.

Así conseguiremos, ya digo, suprimir los jueces de instrucción que se van a crear, y abreviar la administración de justicia.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

Siento mucho no poder aceptar la indicación que hace mi honorable colega por Jujuy, porque comprendo que ella es inconveniente, y esa necesidad que él indica está llenada en otra parte de la ley, como él mismo ha insinuado, por la creación de los jueces de instrucción.

Si encomendamos a los jueces de paz la formación de los sumarios, que los instruyan, que hagan el expediente criminal para elevarlo al

juez de derecho, vamos a tocar este gravísimo inconveniente: que todos los que tienen que ocurrir a la justicia de paz, no van a encontrar al juez de paz porque éste estará obligado en ese momento a entender en un asunto criminal, en la instrucción de un sumario: que absorbe muchísimo tiempo, como sabe el señor senador por Jujuy.

Una sola declaración absorbe el despacho de un día; si hay que tomar muchas declaraciones, estará el juez de paz inhabilitado por muchos días para oír las demandas de los individuos que tengan que ocurrir a él para dirimir sus controversias.

De manera que por evitar un gasto, vamos a perjudicar este gran desiderátum de todos, que es la justicia breve, sobre todo tratándose de cantidades insignificantes, pues la jurisdicción de la justicia de paz pasa de mil pesos. Aceptando lo que propone el señor senador contrariaríamos, pues, ese gran propósito.

Me parece que estas observaciones han de satisfacer al señor senador; y son las que tiene la Comisión para no aceptar su indicación.

Sr. Carrillo. — No me satisfacen mucho, lo digo con franqueza; las observaciones que acaba de hacer el señor senador por Entre Ríos, pero tampoco estoy dispuesto a sostener mi idea.

Comprendo que la Comisión, que ha estudiado tanto tiempo y con tanta consagración el asunto, está más habilitada que yo para formar un juicio perfecto sobre él; pero no creo exacto que el juez de paz ha de consagrar los treinta días del mes...

Sr. Febre. — No digo treinta; aunque sean diez.

Sr. Carrillo. — No es posible creer que pasará tanto tiempo, pues por la estadística se ve que no son muy frecuentes los delitos en la Capital, ni su número es tan considerable que vaya a absorber todo el tiempo de los jueces de distrito de la Capital. Ocuparán algunas horas cuando llegue el caso de la formación de un sumario en su respectiva sección; pero esto no les quitará el tiempo necesario para atender los demás asuntos.

No veo que tenga aceptación el pensamiento enunciado, y por eso no insisto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Es para observar al señor senador y a la Cámara, que, si bien los jueces de paz tendrán, por su mayor competencia, mayor facilidad para expedirse, su trabajo aumenta considerablemente.

En lugar de veinte juzgados de paz habrá diez, y en lugar de tener jurisdicción únicamente para entender en asuntos relativos a cantidades pequeñas, van a tenerla por cantidades mucho mayores. Así es que no vacilo en afirmar que el número de causas va a ser cinco veces mayor que actualmente. Los jueces de paz van a tener, pues, muchísimo trabajo.

Sr. Carrillo. — Fíjese el señor ministro en que los jueces de paz tal como se van a establecer por esta ley van a dar audiencia, no dos veces por semana, como los actuales, sino diariamente y van a ser jueces rentados.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Perfectamente, pero van a tener muchísimo trabajo.

—Se vota el artículo y se aprueba. En discusión el:

Artículo 7º — Las resoluciones de los jueces de paz, dictadas en primera instancia serán apelables para ante los jueces de primera instancia en lo civil o comercial, según la naturaleza de la causa.

Sr. Carrillo. — En este artículo noto un pequeño defecto de redacción. El artículo está tomado de la ley vigente, pero al trasladarlo era necesario tener presente las modificaciones introducidas. La ley vigente establece que las resoluciones de los jueces de paz en primera instancia — porque puede haberlas en segunda — serán apelables ante los jueces de primera instancia según la clase del asunto; pero ahora, suprimidos los alcaldes, no puede suponerse el caso de que haya sentencia de segunda instancia en los juzgados de paz. Por lo tanto esa frase: «dictadas en primera instancia», debe suprimirse.

Sr. Baibiene. — Debe suprimirse.

Sr. Ortiz. — Es un error que se ha deslizado, no hay inconveniente en que se suprima.

—Se aprueba el artículo con la supresión indicada, lo mismo que sin observación, los siguientes:

Artículo 8º — Las resoluciones recaídas en asuntos civiles o comerciales no serán apelables cuando el objeto del litigio no exceda del valor de cien pesos.

Art. 9º — El procedimiento ante los jueces de paz y el de las apelaciones, en su caso, será verbal y actuado y se seguirá por las reglas del Código de Procedimientos Civil en cuanto sean compatibles con esta forma.

Art. 10. — Cada juzgado de paz tendrá un secretario con el título de escribano público y con el sueldo que le asigne la ley de presupuesto.

Art. 11. — Tendrá además un oficial de justicia, un escribiente y un ordenanza con el sueldo que les asigne la ley de presupuesto.

Art. 12. — Los empleados designados en los artículos 10 y 11 serán nombrados por la Cámara en lo Civil a propuesta del juez de paz y no podrán recibir emolumento alguno de los litigantes.

Art. 13. — Los jueces de paz y los empleados de sus juzgados, no podrán abogar, ni ejercer procuración en causas judiciales, aunque se ventilen ante otros juzgados, bajo pena de destitución.

Art. 14. — El juez de paz será reemplazado en los casos de recusación, ausencia, enfermedad u otro impedimento, por el juez de paz de la sección que le siga en orden numérico.

Art. 15. — Los jueces de paz podrán ser recusados por las causas y en la forma que prescribe el Código de Procedimientos Civil.

—Se lee el

Artículo 16. — El nombramiento de los jueces de paz será hecho por el presidente de la República con acuerdo de la Cámara en lo Civil.

Sr. Febre. — Aquí hay un error de imprenta, debe decir: a propuesta en terna de la Cámara en lo Civil, y no con «acuerdo de la Cámara en lo Civil».

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Me parece que el señor miembro informante está equivocado. El artículo de la Comisión quedó resuelto en la forma en que está presentado: con acuerdo de la Cámara en lo Civil.

Sr. Febre. — Siento muchísimo, señor presidente que el señor ministro de culto haya padecido un olvido sobre este particular. En el seno de la Comisión a donde ha concurrido el señor ministro invitado por ella, hemos discutido bastante este artículo.

La Comisión sostenía su artículo en el despacho del año anterior que debían esos nombramientos ser hechos a propuesta en terna de la Cámara en lo Civil y se fundaba entre otras razones en las que voy a insinuar.

Como los jueces de paz por esta ley deben ser abogados, el objeto de su designación es procurar el mayor acierto en la elección de las personas.

¿Quién, pues, más habilitada para conocer cuáles son los abogados que estén en aptitud de poder desempeñar con mayor acierto las funciones que se les ha encomendado? ¿Es el Poder Ejecutivo o la cámara que directamente está; diré así tocándose con estos abogados, que los conocen mucho mejor que el Poder Ejecutivo que no sabe cuáles son todos los abogados de la matrícula, ni cuáles son los más competentes? Es indudable; la cámara que está viendo los trabajos de los abogados, es la que está en aptitud de juzgar cuáles son los más competentes para el desempeño de estos puestos.

Entonces, pues, quedamos de acuerdo que se haría siempre la propuesta en terna de la Cámara en lo Civil.

El señor ministro convino después de una larga discusión en el seno de la Comisión sobre esto. El señor ministro proponía que fuera con acuerdo de la Cámara en lo Civil y recuerdo que yo le decía: esto es deprimente para el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede venir a someter el nombramiento a la Cámara en lo Civil.

El señor ministro me observó entonces que eso mismo hace con el Senado de la Nación para el nombramiento de los jueces federales, pero es muy distinto, señor presidente; el Senado representa la soberanía de los Estados que componen la Unión y no hay depresión para el Poder Ejecutivo en venir ante este alto cuerpo a pedirle su acuerdo para el nombramiento de esos funcionarios.

Pero no militan todas estas razones respecto a la Cámara en lo Civil de la Capital pues por decoro del gobierno, no debe venir a hacer el nombramiento con acuerdo de ella, sino a propuesta en terna por la Cámara en lo Civil, y entonces el Poder Ejecutivo designará uno de los que se proponen, y no someter el nombramiento a su acuerdo.

Esto sería depresivo, repito, de la alta dignidad del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, decíale también al señor ministro y lo manifesté aquí al Honorable Senado, que es necesario que esta ley sea armónica.

En otro de los artículos de esta ley, para el nombramiento, por ejemplo, de los jueces de mercado, ¿quién los propone? ¿Va el Poder Ejecutivo a solicitar el acuerdo de la municipalidad para su nombramiento? No, señor presidente, la ley vigente dispone que le pase una terna la municipalidad, y entonces el Poder Ejecutivo los nombra.

Tratando de dar armonía a las prescripciones de esta ley, se establecía por la Comisión

Agosto 6 de 1885

CAMARA DE SENADORES

28ª Reunión. 25ª Sesión ordinaria

este mismo procedimiento, para nombrar todos los jueces de paz, buscando primero el acierto en la elección, pues es lo que debe preocuparnos a todos y lo que debe interesar al Poder Ejecutivo.

De manera que en el artículo hay un error de impresión. Donde dice: «con acuerdo de la Cámara en lo Civil», debe decir: «a propuesta en terna de la Cámara en lo Civil».

Esto fué lo acordado y esto lo convenido.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Está desde luego en apoyo de lo que yo sostengo y en contradicción de lo que sostiene el señor senador, el despacho impreso de la Comisión.

El señor senador que deja la palabra recuerda bien una parte de la discusión, pero no el todo de ella. El despacho de este artículo fué hecho en la forma en que se halla impreso, pero con la disidencia del señor senador en el seno de la Comisión, y creo haber rebatido allí, como voy ha rebatir ahora, una por una todas las razones que el señor senador da, para que el artículo quede en la forma que indica.

Precisamente, si yo hubiera de hacer un índice de las razones, para sostener que el artículo está bien, tomaría los acápites que presenta el señor senador.

Si hay alguna depresión, no creo que haya depresión en una ni otra forma; pero si la hay, será precisamente en la forma que propone el señor senador. Si hay alguna probabilidad de acierto, será en la forma contraria a la que propone el señor senador.

De una manera evidente se puede demostrar eso. Si hubiera de buscarse alguna lógica sería también en el artículo, tal cual está despachado y en contra de lo que sostiene el señor senador.

En efecto, ¿qué es más depresivo, darle a uno la iniciativa, o quitársela?

Evidentemente, quitarle la iniciativa; y en lo propuesto por el señor senador, al proponer la cámara una terna limitando la acción del Poder Ejecutivo, lo encierra en un círculo forzoso, le da candidatos y le quita lo que ha tenido; la facultad de nombrar los jueces de paz directamente.

Ya el hecho de aceptar el concurso de una Cámara, para que revise la designación hecha por el Ejecutivo, ya eso mismo es una concesión con relación a las facultades que se le puede dar como iniciador.

Ahora vamos a la otra parte. Se dice con frecuencia que una cámara está en mejores condiciones para conocer las aptitudes de un candidato que el Poder Ejecutivo. La experiencia demuestra lo contrario.

En una corporación hay menos responsabilidad, e indudablemente el sentimiento de ella es mayor cuando uno es el agente encargado de indicar las personas que han de desempeñar una función.

La serie de motivos humanos pesa más sobre la totalidad de los miembros de una corporación que sobre un individuo; la razón de los empeños y concesiones es mucho mayor, cuando se trata de una corporación, en la cual el sentimiento de la responsabilidad es forzosamente menor.

Esto que digo, la experiencia lo demuestra todos los días. Toda vez que se quiera hacer un mal nombramiento pídase una terna. Véase el mecanismo, por el que se producen las ternas en corporación y así se caerá en cuenta de por qué esto tiene forzosamente que ser así.

Tomemos, como digo, las razones humanas, los empeños, los compromisos, las gestiones de parte de los interesados y de los allegados a los interesados. Ellos ven a cada uno de los miembros, y el miembro visto, si es honorable, contesta: no, no puedo aceptar, porque tengo otros compromisos, porque quiero poseer completa mi libertad. Pero, se le dice: Señor, si es una terna; comprométase, los otros dos serán mejores; usted tiene facultad de proponer los otros dos, en mejores condiciones; es un compromiso que tengo. Y, uno, por honorable que sea, por libre de preocupaciones que se halle, dice: Bien, consiento; los otros de las ternas serán mejores; y no cuenta con que los otros miembros de la corporación han contraído el mismo compromiso, de lo que resulta casi siempre una terna de nulidades.

«Casi siempre». ¿Por qué? Porque entonces la responsabilidad se ha dividido y subdividido en la forma que lo he dicho; el compromiso es más liviano, y no cuesta, por lo tanto, contraerlo.

Estoy seguro, — no quiero decir nada en contra de los jueces de paz actuales, entre los cuales figuran honorables sujetos — pero estoy seguro de que si hubiera tenido libertad completa de acción el Poder Ejecutivo, para hacer esos nombramientos, quizás los hubiera hecho mejores.

Luego, pues, la forma que propone el señor senador es, si hay depresión, más depresiva para el Poder Ejecutivo porque le quita la libertad, no ganándose absolutamente nada. Es poner solamente a la Cámara de lo Civil en lugar de la municipalidad; y ya se ve el resultado que eso ha dado.

Después, si se trata de nombramientos de jueces de paz, porque no hemos de asimilar esta

facultad a la que se ejerce, cuando se trata de los nombramientos de los jueces federales; los nombra el Poder Ejecutivo, con el acuerdo del Senado. En este caso los nombrará el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara. Sobre lo que dice el señor senador acerca de que la cámara conoce mejor los abogados que el Poder Ejecutivo, está salvado todo, con que ella niegue el acuerdo a la proposición del Poder Ejecutivo. Además, voy a decir otra cosa: Yo veo aparecer esta objeción; casi siempre. «El que está en contacto inmediato con ciertos individuos los conoce mejor». No es cierto, y lo establezco de una manera positiva. Cuando hay una reputación jurídica, una reputación médica, de ingeniero, o de cualquiera otra clase, por sí sola trasciende, y tan apto es, para conocer al que es buen médico, buen jurisconsulto, o buen ingeniero, cualquiera que habite en el país, como una corporación o gremio de abogados, de médicos o de ingenieros; porque la reputación se impone como la luz, y, sino, dígaseme si entre nosotros no es una notabilidad médica el doctor Rawson, si no es una notabilidad jurídica el doctor Quintana.

Sr. Febre. — ¿Me permite que le interrumpa? Está hablando el señor ministro en la hipótesis de que se nombren para jueces de paz a notabilidades jurídicas, y quiero llamarle su atención de que son abogados nuevos los que van a ser nombrados, y que no pueden ser notabilidades conocidas por todos.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Si el señor senador hubiera tenido un poco de paciencia...

Sr. Febre. — No necesito paciencia para oír al señor ministro: lo oigo con mucho gusto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Muchas gracias.

Queda establecido, que respecto a las notabilidades, no hay excepciones: tan hábil es una corporación como un individuo del pueblo para conocerlas.

Ahora, para las personas que recién se anuncian, que recién salen a la vida pública, tan impropia es la cámara como el Poder Ejecutivo para conocer las aptitudes.

Por una razón muy sencilla, las aptitudes serán más bien conocidas por los maestros en la universidad y no por la cámara ante la cual no han abogado; los miembros de la cámara por sus funciones, están separados del público, están relegados a cierto antro de la vida social, diré, y no están en condiciones de conocer, sino por excepción, las aptitudes de los que pueden litigar ante ella.

Muchas veces, un abogado no tiene ocasión

de ir ante la cámara, y durante muchísimo tiempo no puede mostrarse, ni hacerse conocer; son los jueces de primera instancia o los compañeros, los otros abogados, los que saben cuál es el joven que tiene talento.

Si son nuevos los que van a ser nombrados para desempeñar estos puestos de jueces de paz, con mayor razón habrá que tomar informes de la universidad, pero no de la cámara que no sabe absolutamente como son.

Además, ¿cuándo está probado que las corporaciones eligen siempre lo mejor?

Eso sería suponer que cada uno de los miembros de la cámara ha de tener más interés por el bien público que el presidente de la República, que sus ministros, cuando, según la demostración que hice anteriormente, queda probado que es más fácil contraer un compromiso por una mediocridad siendo uno miembro de una corporación, de una cámara, que siendo uno personalmente responsable.

Me parece que el artículo debe quedar como está; y yo recurriría a la memoria del otro señor miembro de la Comisión para que me diga si estoy equivocado y si no quedó sancionado en la Comisión como está impreso.

Sr. Ortiz. — Efectivamente, estábamos en disidencia en ese punto y así quedamos.

Habiéndose ausentado después el señor senador por Entre Ríos, yo fui encargado de correr con la organización de éste y de la impresión del despacho; y entonces, creyendo que no podía figurar en el dictamen de la Comisión sino la opinión de la mayoría, se formuló en esta forma, sin perjuicio de que el honorable colega disidente expusiera las razones que tiene para no adherirse a él.

Así es que yo estoy completamente de acuerdo con esta reforma, y por eso figura en el despacho de la Comisión.

Sr. Febre. — Aquí está comprometida la palabra de un senador; está comprometida también en este recinto sobre un hecho pasado en la Comisión, la palabra del señor ministro, y sale en apoyo de ella la palabra de mi colega de Comisión, el senador por Salta.

Pero como es necesario definir estos hechos para que el público sepa quién es el que tiene razón, porque se trata de intereses y negocios públicos, pido que se traiga el proyecto original y se lea.

Si yo hubiera estado en disidencia, mi firma hubiera figurado en ese sentido y no en perfecta conformidad con el proyecto.

Y quiero recordar, tanto a mi colega de Comisión como al señor ministro, que mi disidencia capital, después que nos conformamos

con este artículo tal cual está establecido en el proyecto original y como yo lo sostengo, era sobre la división de las funciones que la Comisión anterior de Legislación de que formaba parte el senador por Tucumán, señor Nongués, hacía de la Cámara de Apelación en lo Civil, señalando tres jueces para que conocieran en los juicios sumarios y en las apelaciones interlocutorias, y otros cinco miembros para que entendieran en los juicios ordinarios.

Esta fué también la razón capital que hubo para que se aplazara la consideración de este asunto en las sesiones del año pasado.

Y entonces conviniendo el señor ministro que no se aumentara el número de los vocales de la Cámara de lo Civil, cedi en mi disidencia respecto a la división porque ya no tenía razón de ser, pues no había vocales bastantes para hacer la división de las cámaras; y fué esto en lo que yo asentí, conviniendo a su vez el señor ministro en retirar sus observaciones sobre el artículo que está ahora en discusión. Esto es lo que ha habido.

Yo he retirado mi disidencia respecto a la división de las cámaras; pero respecto de este artículo he mantenido siempre mis opiniones, y el señor ha concurrido conmigo y los demás miembros de la Comisión a establecerlo así, y así está en el proyecto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No creo que deba tomarse la cuestión así como la toma el señor senador; no creo que esté empeñada la palabra del señor senador ni la palabra del señor ministro, ni la palabra del otro señor senador.

Se trata de un incidente pasado en la Comisión, que no tiene la importancia capital que parece darle el señor senador. No se trataría, cuando más, sino de un olvido; olvido muy fácil respecto a un incidente insignificante, en esencia insignificantísimo, como voy a demostrarlo de nuevo; olvido, repito, respecto a este incidente que no ha comprometido ni la palabra ni la reputación, ni siquiera la memoria de los que intervinieron en esta discusión.

En efecto, es insignificante que el Poder Ejecutivo sea el primero que pronuncie un nombre de candidato para juez de paz y que lo acepte la Cámara, o que la Cámara le mande tres y acepte uno el Poder Ejecutivo.

No se trata siquiera de preeminencia en este caso. El Poder Ejecutivo puede proponer a la cámara un candidato que a ella no le guste y la cámara rechazarlo; y el Poder Ejecutivo también, si no quiere nombrar ninguno de los de la terna presentada por la cámara, puede

estar rechazándolos constantemente; de modo que siempre el Poder Ejecutivo vendría a ser el que hiciera en definitiva el nombramiento; a fuerza de ternas, al fin y al cabo alguna le había de proponer que le gustara, de manera que en el fondo, para el fin práctico, es exactamente lo mismo; no así para la teoría y para el acto que hay en este nombramiento de jueces de paz, que siempre en las provincias, el gobernador es el que lo hace sin anuencia de otra autoridad y algunas veces con la de la municipalidad.

El señor senador no puede insistir en su argumento, fundado en lo depresivo que es para el Poder Ejecutivo que se haga los nombramientos como está escrito aquí.

No es depresivo que el Poder Ejecutivo tenga la iniciativa.

Al contrario; eso lo enaltece más bien, porque le da la facultad de elegir él y de proponer; hace de la cámara una especie de poder rectificador de alguna equivocación que pudiera tener el Poder Ejecutivo, facultándola para no aceptar la proposición.

Creo que podría votarse.

Sr. Febre. — Es que hay una disidencia muy grave.

Sr. Ortiz. — Pido la palabra.

En el original está tal cual dice el señor senador; pero debiendo figurar en el despacho de la Comisión la opinión de la mayoría, compuesta del señor senador por San Luis doctor Cortés y yo, es que se ha hecho esta reforma y suponíamos que si nuestro colega el señor senador por Entre Ríos estaba en disidencia, podía al tratarse el artículo dar las razones que tenía para ello.

El único error que yo encuentro aquí, es que no se haya puesto en el despacho de la Comisión en disidencia, el artículo del señor senador por Entre Ríos. En lo demás, creo que se ha procedido legalmente.

El señor senador por San Luis y yo, hemos estado conformes con la redacción que se ha hecho en el proyecto; es decir, que se nombre estos jueces por el Poder Ejecutivo y con acuerdo de la Cámara de lo Civil.

Sr. Presidente. — Estando la Comisión en disidencia, se votará.

Sr. Febre. — Yo había cedido la palabra al señor senador, mi colega de Comisión, pero deseando usar de ella después que él terminase.

Las manifestaciones que acaba de hacer el señor senador por Salta, satisfacen hasta cierto punto mi propósito. Yo no necesito decirlo, pero soy incapaz de hacer, no digo ante el Senado sino ante ninguna persona, una afir-

mación que no fuera revestida de los caracteres ineludibles de la verdad; y era por eso que yo quería que se leyera el artículo originario del proyecto; pero como ya lo ha manifestado mi honorable colega de Comisión, está llenado mi propósito. Yo estaba en lo correcto.

Sr. Ortiz. — Como estoy también yo en lo correcto.

Sr. Febre. — No digo que no; no hablo de eso.

Voy a ocuparme ahora de las observaciones que hacía el señor ministro respecto de este artículo, para que quedase como él lo cree más conveniente.

Nos decía el señor ministro, que haciendo directamente el Poder Ejecutivo estos nombramientos, serían de seguro más acertados, porque el Poder Ejecutivo tendría entonces exclusivamente la responsabilidad de ese acto; y que viniendo las propuestas en terna hechas por la Cámara en lo Civil — que he dicho que es la más competente para hacer esta indicación, puesto que se trata de abogados — entonces le habían de proponer malas ternas al Poder Ejecutivo. Estas son suposiciones que hace el señor ministro, que no se fundan en ningún hecho. El cree que van a venir los parientes e interesados a decirle al vocal de la cámara A: — «Proponga este candidato que es bueno.» — «¡Si no es apto, señor!» — «Propóngalo el último, porque los dos anteriores han de ser buenos.» Y así comprometidos, han de ceder a estas exigencias, y como lo mismo harían otros pretendientes que habrían ya buscado sus padrinos como se dice, resultaría que las ternas presentadas al Poder Ejecutivo serían ridículas e inaceptables.

Yo pregunto si es posible suponer que los miembros de la Cámara en lo Civil de la Capital — porque esta ley estamos haciéndola para esta ciudad y tenemos que contraernos a casos concretos para que sea ejecutada por la Cámara en lo Civil —, si es posible suponer, digo, que los miembros de la Cámara de lo Civil de la Capital tengan todas estas debilidades para consentir en proponer individuos ineptos a la consideración del Poder Ejecutivo, por deferir a exigencias más o menos empeñosas de personas que tengan relación con ellos. Creo redondamente que no; hago más honor a los miembros de esa cámara; creo que ninguno es capaz de aceptar estas exigencias, y en tal caso es fuera de duda para mí, que las propuestas hechas en terna por la Cámara de lo Civil han de ser perfectamente aceptables y en las condiciones que establece la ley.

Decía el señor ministro, que la cámara no

es la más competente para saber cuáles son los más aptos.

Cuando se habla de médicos y abogados, el pueblo que juzga, sabe quienes son los más competentes; pero esto es tratándose de notabilidades, y aquí hablamos de abogados noveles, que recién salen a ejercer su profesión, siendo de entre estos que han de hacerse las propuestas, y siendo ellos los únicos que aceptarían estos puestos, y la cámara ha de conocerlos, porque van allí con sus trabajos profesionales; y los abogados que en el ejercicio de su profesión no hayan tenido la oportunidad de llegar hasta la cámara, deben ser abogados de pacotilla, y esos estoy seguro no se propondrían, haciendo honor a la rectitud de la Cámara de Justicia en el desempeño de sus funciones en esta ley.

Las notabilidades, en cualquier ramo del saber humano, se conocen públicamente; pero aquí no se trata de nombrar notabilidades, ni de nombrar abogados hechos, viejos, formados y con clientela numerosa. No, señor; se trata de nombrar abogados nuevos, y la cámara, repito, los conoce por sus trabajos en el desempeño de su profesión, y también porque como son del ramo, desde sus estudios y por las tesis que presentan al recibirse de doctores en jurisprudencia, juzga ya más o menos de la competencia que han de tener como abogados.

Pero el señor ministro se olvida que dejando al Poder Ejecutivo la facultad de hacer estos nombramientos, sin que venga la propuesta en terna de la cámara, también han de irle al Poder Ejecutivo los empeños que él atribuía se ejercitarían sobre la cámara; han de irle aquellos con quienes tenga compromisos políticos, cosa que no es tan fácil suceda con la cámara, y ha de elegirse muchos individuos por compromisos políticos, porque son partidarios de la situación, aun cuando no sean los más aptos.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Lo mismo serían con la terna.

Sr. Febre. — No sería lo mismo.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¡Cómo no!

Sr. Febre. — El señor ministro dice que rechazaría las ternas hasta que vinieran buenas. Pero, si tiene este recurso, quiere decir que no hay inconveniente en que se proponga una terna mala.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Ese argumento hacía para probarle al señor senador que mi propuesta no es interesada; nada más.

Agosto 6 de 1885

CAMARA DE SENADORES

28ª Reunión. 25ª Sesión ordinaria

Sr. Febre. — Decía también el señor ministro que se menoscababa una alta prerrogativa del Poder Ejecutivo, cual era la iniciativa en estos nombramientos. Esa alta prerrogativa se menoscabaría también cuando nombra los jueces federales, y me parece que a ningún miembro del Poder Ejecutivo se le ha ocurrido quejarse de que la Constitución haya establecido esa formalidad del acuerdo del Senado.

Los jueces de mercado que establece este proyecto los propone la municipalidad, y según la ley vigente también los propone la municipalidad, y jamás se ha quejado de esto el Poder Ejecutivo, y él concurrió por medio de sus ministros, a la sanción de la ley que está en vigencia.

Pienso, pues, que el artículo debe mantenerse como lo despachó la Comisión el año anterior, porque de esta manera se rodea la ley de todas las garantías necesarias para que el nombramiento de los jueces que sean propuestos en terna por la cámara, recaiga en las personas más competentes.

Esto es lo que deseamos: que haya buenos jueces de paz. Yo, a lo menos, no tengo otro propósito, ni me mueve ninguna otra idea al respecto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Aun cuando yo creo que la Cámara está bien ilustrada sobre todos los puntos referentes a este artículo, no quiero dejar sin levantar una especie de cargo que resultaría de la interpretación que podría hacerse de las palabras del señor senador.

Toda frase general, si se sintetiza y aplica a un caso dado, resulta por lo menos enojosa. Yo he dicho en general: las propuestas hechas por corporaciones para designar ternas son más susceptibles de no ser tan lucidas en su empeño como la designación hecha por una persona exclusiva.

Sr. Febre. — No tiene aplicación esa tesis en general, estamos en un caso particular.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Permítame el señor senador, yo no he dicho que la Cámara en lo Civil, compuesta como está de hombres honorables, va a elegir medioeridades; he dicho una corporación que tenga que elegir tres...

Sr. Febre. — Pero su contradicción es a este artículo — que va a ser ejecutado por la Cámara en lo Civil.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero mi proposición es general y

el señor senador no me la hará particular por más empeño que tenga en ello.

Sr. Febre. — Pero es particular.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Será particular el artículo, pero yo hablo en tesis general; él decía que era deprimente para el Poder Ejecutivo hacer la signación en la forma que lo dice el artículo, le probé que no era deprimente y el señor senador, olvidando que mi objeción es para rebatir la suya me hace a mí propietario de la suya, y dice: el ministro cree que va a perder...

Sr. Febre. — Por la iniciativa.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No he dicho semejante cosa, he dicho todo lo contrario, mi frase es pues general, no he dicho que la Cámara en lo Civil va a proponer una terna de nulidades.

Sr. Febre. — Es la que va a proponer la terna según la ley.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Yo no le digo tal cosa, si quiere el señor senador lo puedo jurar, no quiero decir eso; digo que toda corporación que propone una terna está más expuesta a proponer medioeridades que un individuo que elige, por la sencilla razón de que es más fácil elegir uno bueno que tres buenos, por la sencilla razón de que un sujeto eligiendo, elige con más libertad que quince o veinte, porque en esta última elección, aunque cada miembro tenga la mejor intención, es raro que todos los miembros tengan la misma buena intención respecto al mismo individuo, y que ese mismo individuo acierte a ser el mejor.

Hay en la elección hecha por un cierto número de individuos necesariamente transigencias y forzosamente está en la naturaleza misma que esta elección resulte menos buena que la hecha por una sola persona.

Yo no tengo de ello la culpa, depende eso de que tres es más que uno, y que una designación hecha por una corporación, es hecha sin la libertad absoluta de todos los miembros, que tienen que obedecer a la mayoría; nada más.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo como lo propone la Comisión en mayoría. Si fuese rechazado, será votado con la modificación.

Sr. Febre. — ¿Qué dice el señor presidente?

Sr. Presidente. — Que se va a votar el artículo como está impreso.

Sr. Febre. — ¿El año pasado?

Sr. Rojas. — Ese ya no es proyecto; ahora cualquiera que haya sido la opinión del Senado

el año pasado, eso ya no es proyecto, estamos discutiendo lo que nos ha presentado la Comisión.

Sr. Febre. — Eso ya se sabe, el del año pasado ya lo resolvió el Senado.

Sr. Rojas. — En tal caso no debe insistir.

Sr. Presidente. — Se va a votar este artículo 17, anteriormente 16.

Sr. Rojas. — El año pasado el señor ministro hizo moción de aplazamiento del proyecto y se dispuso suspender su consideración con el objeto de presentar reformas que él iba a traer al conocimiento de la Cámara; el señor ministro ha cumplido, ha traído las reformas hechas por un abogado y esas reformas son las que figuran en este proyecto.

Es muy sencillo el asunto, lo que tiene que ponerse a votación es lo que está ahora como artículo.

Sr. Presidente. — Se va a votar si se aprueba el artículo 16, ahora 17.

Sr. Febre. — Vamos a votarlo por partes.

Ya que se quiere forzosamente votar el artículo como se ha leído, yo he pedido que se vote como está el original, para lo cual pedía su lectura.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Yo tengo un recuerdo muy vivo sobre esto. El doctor Ortiz, miembro de la Comisión, opinaba conmigo, el señor Cortés miembro de la Comisión, opinaba también conmigo, y el señor senador por Entre Ríos estaba en contra...

Sr. Rojas. — Podríamos prescindir de esta discusión y votar el artículo.

—Se lee:

«El nombramiento de los jueces de paz será hecho por el presidente de la República.»

Sr. Cambaceres. — Voy a permitirme hacer una pequeña indicación; para que la frase

quede más correcta me parece que debe decir en vez de presidente de la República: Poder Ejecutivo. Es funcionando en carácter de tal...

Sr. Rojas. — Pero es que la Constitución atribuye al presidente de la República los nombramientos...

Sr. Cambaceres. — El presidente solo no puede elegir jueces de paz, el nombramiento tiene que llevar la firma del secretario.

Sr. Rojas. — Pero la Constitución cuando ha atribuido al Poder Ejecutivo el derecho de hacer el nombramiento, lo atribuye al presidente de la República.

Sr. Cambaceres. — Perfectamente.

Sr. Presidente. — Se va a votar el artículo como está.

Sr. Febre. — ¿Por partes?

Sr. Presidente. — Sí, señor.

—Se lee:

«El nombramiento de los jueces de paz será hecho por el presidente de la República.»

—Se vota si se aprueba esta parte, y resulta afirmativa.

—Se lee:

«Con acuerdo de la Cámara en lo Civil.»

Sr. Febre. — A propuesta en terna de la Cámara en lo Civil.

Sr. Presidente. — Por ahora se va a votar como está aquí. En caso que no fuera aceptado se votará en la forma que indica el señor senador por Entre Ríos.

—Se vota si se aprueba la parte leída, y resulta afirmativa.

—Se levanta en seguida la sesión, siendo las 4 y 30 p. m.